

Señores

CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL 1

UNIDAD DE RESPONSABILIDAD FISCAL

CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL, INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

S.

D.

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
DE DOBLE INSTANCIA

RADICADO: PRF-88112-2017-002

ENTIDAD AFECTADA: CÁMARA DE REPRESENTANTES

VINCULADOS: DIANA ROJAS BRIÑEZ Y BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA

TERCEROS VINCULADOS: AXA COLPATRIA S.A.

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi calidad de apoderado especial de **AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.**, entidad con domicilio en Bogotá D.C., autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme al poder adjunto, de manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, manifiesto comedidamente que procedo a pronunciarme frente al **AUTO DE IMPUTACIÓN No. 88112-2017-002**, por medio del cual se mantuvo en calidad de tercero civilmente responsable a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., con fundamento en las Pólizas de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000524 y No. 8001000636, solicitando que desde ya sea exonerada de cualquier tipo de condena que pretenda endilgársele y, consecuentemente, se proceda a resolver su desvinculación, conforme con los argumentos que se exponen a continuación:

I. OPORTUNIDAD

En primera medida, cabe aclarar que el presente escrito se presenta dentro del término concedido por Auto No, UF1-0277 del 27 de diciembre de 2022, dentro del cual se previó que mi representada contaba con el término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo, para presentar los argumentos de defensa y las pruebas que pretenda hacer valer, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 610 de 2000.

Así las cosas, atendiendo a que el mentado auto fue notificado a la dirección de correo electrónico notificacionesjudiciales@axacolpatria.co el día 24 de enero de 2023, nos encontramos dentro de la oportunidad correspondiente para presentar los argumentos de defensa que a continuación se desglosan.

II. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

- **Objeto de la Investigación Fiscal:**

El presente proceso de responsabilidad fiscal tiene como origen la denuncia con radicado No 2011-317348211-D, a través de la cual se informó sobre presuntos pagos indebidos realizados en la CÁMARA DE REPRESENTANTES entre los años 2011 a 2015, al reconocerse y pagar una prima técnica a once (11) funcionarios de dicha entidad, sin que presuntamente cumplieran con las exigencias legales necesarias para ello.

Conforme al auto de apertura No. 245 del 8 de junio de 2018, dichos reconocimientos tuvieron como fundamento las Resoluciones No. 1356, 1354, 1348, 1352, 1349, 1346, 1350, 1358, 1361 y 1355 del 01 de junio de 2011 y No. 0686 de 17 de julio de 1998, con las cuales se beneficiaron los siguientes servidores: CAYO RICARDO BUITRAGO ESPEJO, en su condición de Operador de Sistemas de la Secretaría General; HAROLD ALFONSO BUSTAMENTE SOTO, en su condición de Operador de Sistemas en la Comisión Legal de Cuentas; ROSALBA CARVAJAL PARRA, en su condición de Operador de Sistemas de la Segunda Vicepresidencia; CARMENZA CRUZ PARRA, en su condición de Mecnógrafa Sección registro y Control; GIOVANNY DURLEY GONZALEZ COLORADO, en su condición de Mensajero de la Secretaría General; DIANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en su condición de Mecnógrafa de la División de Personal; HUMBERTO GUERRERO ACOSTA, en su condición de Transcriptor de Comisión Especial de Aseguramiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial; ITA MARÍA MARTINEZ LOZANO, en su condición de Transcriptor Sección Grabación; AMANDA TINJACA RUÍZ, en su condición de Mecnógrafa de la Comisión Segunda Constitucional Permanente; HERNANDO RODRÍGUEZ CASTILLA, en su condición de Operador de Equipo Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y; ALVARO TORRES TELLEZ, en su condición de Asistente Administrativo, reconocimientos que suman en total el valor de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$896.044.974).**

En concordancia con lo anterior, por Auto No. 245 del 8 de junio de 2018 se dio apertura al presente proceso de responsabilidad fiscal, en el cual se identificó como presuntos responsables a:

- **CARLOS ARDILA BALLESTEROS**, identificado con C.C. No. 13.827.774, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para la época de los hechos.
- **JAIRO JARAMILLO MATIZ**, identificado con C.C. No. 13-452-839, en su calidad de Director Administrativo de la Cámara de Representantes para la época de los hechos.

- **DIANA ROJAS BRIÑEZ**, identificada con C.C. No. 52.967.933, en su condición de Jefe de División de Personal para la época de los hechos.
- **BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA**, identificada con C.C. No. 41.755.873, en su calidad de Jefe de la División Financiera para la época de los hechos.
- **CARLOS ALBERTO FLÓREZ ROJAS**, identificado con C.C. No. 19.395.467, en su condición de Jefe de la Dirección Jurídica para la época de los hechos.

Por auto No. 623 del 18 de noviembre de 2019, la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva decretó el archivo parcial de la acción fiscal a favor de **CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS, JAIRO JARAMILLO MATIZ y CARLOS ALBERTO FLÓREZ ROJAS**, por considerar estructura el fenómeno de la caducidad de la acción fiscal, respecto de los hechos que los involucraban a la investigación.

De otra parte, por Auto No. URF1-0271 del 13 de diciembre de 2022 se vinculó como tercero civilmente responsable a la compañía aseguradora AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., en virtud de las siguientes Pólizas de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales:

- Póliza No. 8001000524, certificado 0, con vigencia entre el 16 de junio de 2010 y el 16 de junio de 2011.
- Póliza No. 8001000524, certificado 1, con vigencia entre el 16 de junio de 2011 y el 1 de agosto de 2011.
- Póliza No. 8001000524, certificado 2, con vigencia entre el 1 de agosto de 2011 y el 1 de octubre de 2011.
- Póliza No. 8001000524, certificado 3, con vigencia entre el 1 de octubre de 2011 y el 15 de noviembre de 2011.
- Póliza No. 8001000524, certificado 4, con vigencia entre el 15 de noviembre de 2011 y el 8 de diciembre de 2011.
- Póliza No. 8001000636, certificado 0, con vigencia entre el 8 de diciembre de 2011 y el 19 de junio de 2012.

Al respecto, es imprescindible considerar que la Contraloría no cumplió con el término previsto en el artículo 45 de la Ley 610 de 2000 para vincular a mi prohijada, considerando que esta disposición indica que: *“el término para adelantar estas diligencias será de tres (3) meses, prorrogables hasta por dos (2) meses más, cuando las circunstancias lo ameriten, mediante auto debidamente motivado”*, y el auto de apertura tiene como fecha de expedición el 8 de junio de 2018, de manera que la vinculación de mi prohijada se efectuó fuera del término anteriormente aludido, pues se le vinculó mediante Auto No. URF1-0271 del 13 de diciembre de 2022, esto es, cuatro años, 6 meses y 5 días después de proferido el auto de apertura, lo cual evidencia un claro desconocimiento de la norma antes citada.

- **Vinculación de AXA COLPATRIA S.A., en calidad de tercero civilmente responsable:**

Como se anticipó, la vinculación de mi prohiada se efectuó mediante el Auto No. URF1-0271 del 13 de diciembre de 2022, con fundamento en los Pólizas de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000524 y No. 800100063630 con vigencias entre el 16 de junio de 2010 y el 19 de junio de 2012, atendiendo a que los hechos objeto de reproche son, presuntamente, originados en conductas de funcionarias de la CÁMARA DE REPRESENTANTES.

A primera vista, es evidente que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA incurrió en un error al vincular a mi prohiada, considerando que se configuró la prescripción extraordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro, dado que se le vinculó más de diez (10) años después de que se expidieron las resoluciones del 01 de junio de 2011, esto es, de haberse configurado el daño fiscal, considerando que mediante dichos actos administrativos se reconoció una prima técnica a distintos funcionarios de la CÁMARA DE REPRESENTANTES sin que, presuntamente, estos cumplieran con los requisitos para tal.

Esto, considerando que el artículo 1081 del Código de Comercio prescribe que la prescripción extraordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro es de cinco años, contados desde que nace el respectivo derecho y, para el caso, es manifiesto que este término debe contarse a partir del hecho generador del daño que, como ya se advirtió, se configuró el 01 de junio de 2011, fecha para la cual se suscribieron las resoluciones mediante las que se reconoció la prima técnica a once (11) servidores del órgano legislativo antes señalado. De esta manera, es claro que operó el fenómeno de la prescripción extraordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro, resultando inadmisibile que mi representada sea llamada a responder en el presente proceso.

Adicionalmente, es necesario considerar que la póliza no presta cobertura en el caso concreto, por cuanto no se configuró el riesgo asegurado, de manera que, al no existir fundamentos fácticos y jurídicos para mantener la vinculación de mi representada al presente proceso, comedida y respetuosamente solicito desde ya su desvinculación, no sin antes hacer una referencia a los elementos de la responsabilidad fiscal y, concretamente, la manera en que estos no se configuraron en el caso de marras.

III. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS DE LA DEFENSA FRENTE AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

- **CADUCIDAD DE LA ACCIÓN FISCAL:**

Para comenzar, es importante señalar que en el presente asunto es claro que operó la caducidad de la acción fiscal, al haber transcurrido más de cinco (5) años entre la ocurrencia del presunto

hecho generador al patrimonio público y el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Lo anterior, con fundamento en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, que a su tenor predica:

*“ARTÍCULO 9o. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. **La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal.** Este término empezará a contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto.*

La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare.

El vencimiento de los términos establecidos en el presente artículo no impedirá que cuando se trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación de la totalidad del detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la administración, a través de la acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la contraloría correspondiente o por la respectiva entidad pública”.

Pues bien, teniendo claro que la caducidad de la acción fiscal se configura después de transcurridos cinco (5) años desde el hecho generador del daño al patrimonio público hasta el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, es menester esclarecer el momento en que se configuró el hecho generador del daño patrimonial en el caso concreto. Para ello, es necesario recordar que en el presente asunto se tiene como hecho generador del daño patrimonial, la expedición de las Resoluciones No. 1356, 1354, 1348, 1352, 1349, 1350, 1358, 1361 y 1355 del 1 de junio de 2011, y No. 0686 del 17 de julio de 1998, de acuerdo con las cuales se le otorgó una prima técnica a once (11) funcionarios de la CÁMARA DE REPRESENTANTES sin que, presuntamente, estos cumplieran con el lleno de exigencias legales necesarias para ello, pues sus evaluaciones de desempeño se encontraban por debajo de noventa por ciento (90%).

Esto es así, si se tiene en cuenta que al realizar el análisis de la conducta de las presuntas responsables fiscales, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA refirió que tanto la señora Diana Rojas Briñez, como la señora Blanca Emma Salazar Bonilla, avalaron con su visto bueno la asignación de la prima técnica de los once (11) funcionarios de la CÁMARA DE REPRESENTANTES, con la suscripción de las resoluciones No. 1356, 1354, 1348, 1352, 1349, 1346, 1350, 1358, 1361 y 1355 del 01 de junio de 2011.

Por lo anterior, es claro que el hecho generador del daño no puede ser uno distinto a la expedición de los actos administrativos citados, toda vez que mediante los mismos se reconoció una prima técnica, presuntamente, sin el lleno de requisitos legales a varios funcionarios de la CÁMARA DE REPRESENTANTES. Así las cosas, como estas resoluciones se expidieron el 01 de junio de 2011 y el auto de apertura se profirió el 8 de junio de 2018, es decir, más de cinco (5) años desde

la ocurrencia del hecho generador, es evidente que operó la caducidad de la acción fiscal, a luces del artículo 9 de la Ley 610 de 2000.

De otro lado, también es necesario considerar que, aun cuando el ente de control fiscal alega el pago de dicha prima técnica entre los años 2011 y 2015, el hecho generador del daño no podría considerarse como continuado durante dichas anualidades, en consideración a que el artículo 5 del Decreto 2164 de 1991 establece que “(...) *una vez otorgada la prima técnica, el servidor deberá ser evaluado anualmente. Será causal de pérdida de la misma obtener una calificación definitiva inferior al noventa por ciento (90%)*”. Por contera, el análisis sobre la procedencia de la prima técnica se debía realizar anualmente, de conformidad con la evaluación de desempeño del servidor público, por lo que de manera alguna puede considerarse que el hecho generador del daño fue continuado entre los años 2011 y 2015, sino que se configuró un hecho generador anualmente.

Entonces, en gracia de discusión, es aún más claro que operó la caducidad de la acción fiscal para los pagos reconocidos en los años 2011 y 2012, comoquiera que transcurrieron más de cinco (5) años desde su reconocimiento hasta que se profirió el auto de apertura en el presente proceso de responsabilidad fiscal, lo cual ocurrió solo hasta el 8 de junio de 2018.

Con todo, es evidente que caducó la acción fiscal, por cuanto el presunto hecho generador del daño al patrimonio se configuró a partir de la suscripción de las resoluciones No. 1356, 1354, 1348, 1352, 1349, 1346, 1350, 1358, 1361 y 1355, lo cual sucedió el 01 de junio de 2011 y, después de 7 años y 7 días, el ente de control fiscal profirió el auto de apertura del presente proceso de responsabilidad fiscal, configurándose así los presupuestos necesarios para la caducidad de la acción fiscal.

Ahora, en gracia de discusión, también debe considerarse la evidente caducidad de la acción fiscal para los reconocimientos y pagos de la prima técnica de los años 2011 y 2012, comoquiera que transcurrieron más de cinco (5) años desde que se reconocieron hasta que se dio apertura al presente asunto.

• **FRENTE A LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL:**

Para comenzar, basta con recordar que la responsabilidad fiscal se configura luego de que en el debate probatorio surtido dentro del proceso administrativo, queden plenamente acreditados todos y cada uno de los elementos constitutivos de la misma, esto es, una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible al gestor fiscal, un daño patrimonial del Estado y un nexo causal entre los elementos previamente expuestos. En efecto, lo anterior ha sido establecido en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, el cual es claro al establecer:

“ARTICULO 5o. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:

- **Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.**
- **Un daño patrimonial al Estado.**
- **Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.**” (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Al respecto, frente a los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, el Consejo de Estado mediante sentencia del 22 de febrero de 2018, expediente No. 2108483, C.P. Doctor Alberto Yepes Barreiro, se ha manifestado en los mismos términos que se han venido desarrollando, como a continuación se expone:

“Para que pueda proferirse decisión declarando la responsabilidad fiscal es menester que en el procedimiento concurren tres características: (i) Un elemento objetivo consistente en que exista prueba que acredite con certeza, de un lado la existencia del daño al patrimonio público, y, de otro, su cuantificación. (ii) Un elemento subjetivo que evalúa la actuación del gestor fiscal y que implica que aquel haya actuado al menos con culpa. (iii) Un elemento de relación de causalidad, según el cual debe acreditarse que el daño al patrimonio sea consecuencia del actuar del gestor fiscal.”

En este sentido, a continuación se argumentarán las razones por las cuales, en el caso bajo estudio, no se encuentran demostrados, siquiera sumariamente, la configuración de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, en particular el daño patrimonial al Estado y el dolo o culpa grave en la conducta del gestor fiscal. En consecuencia, el honorable Despacho no tendrá una alternativa diferente que archivar el presente proceso de responsabilidad fiscal.

A. EN EL PRESENTE CASO NO SE REÚNEN LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL – NO OBRA PRUEBA SOBRE LA CERTEZA DEL DAÑO PATRIMONIAL

Tal y como se expuso anteriormente, para que se configure la responsabilidad fiscal es imperativo que en el plenario se encuentre suficientemente acreditado un daño patrimonial al Estado. En este sentido, vale la pena analizar la sentencia C-340 de 2007, en la cual se explicó que, a diferencia del proceso de responsabilidad disciplinaria en donde el daño es extrapatrimonial y no susceptible de valoración económica, en la responsabilidad fiscal el perjuicio debe ser cierto y de contenido eminentemente patrimonial. El tenor literal del mencionado fallo es el siguiente:

“b. La responsabilidad que se declara a través de dicho proceso es esencialmente administrativa, porque juzga la conducta de quienes están a cargo de la gestión fiscal, pero es, también, patrimonial, porque se orienta a obtener el resarcimiento del daño causado por la gestión fiscal irregular, mediante el pago de una indemnización pecuniaria, que compensa el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.

c. Como consecuencia de lo anterior, **la responsabilidad fiscal** no tiene un carácter sancionatorio -ni penal, ni administrativo-, sino que su naturaleza **es meramente reparatoria**. Por consiguiente, la responsabilidad fiscal es independiente y autónoma, distinta de las responsabilidades penal o disciplinaria que puedan establecerse por la comisión de los hechos que dan lugar a ella.

Sobre este particular, la Corte, en la Sentencia C-661 de 2000, al referirse a la distinta naturaleza del daño en la responsabilidad disciplinaria y en la fiscal, puntualizó que mientras que el daño en la responsabilidad disciplinaria es extrapatrimonial y no susceptible de valoración económica, **el daño en la responsabilidad fiscal es patrimonial**. En consecuencia, señaló la Corte, "... el proceso disciplinario tiene un carácter sancionatorio, pues busca garantizar la correcta marcha y el buen nombre de la cosa pública, por lo que juzga el comportamiento de los servidores públicos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública", al paso que "... **el proceso fiscal tiene una finalidad resarcitoria, toda vez que 'el órgano fiscal vigila la administración y el manejo de los fondos o bienes públicos**, para lo cual puede iniciar procesos fiscales en donde busca el resarcimiento por el detrimento patrimonial que una conducta o una omisión del servidor público o de un particular haya ocasionado al Estado". (Subrayado y negrilla fuera del texto original).¹

En efecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se ha pronunciado en los mismos términos, al establecer que para que sea procedente la declaratoria de responsabilidad fiscal, definitivamente debe existir un daño patrimonial sufrido por parte del Estado. No obstante, no cualquier tipo de daño es susceptible de ser resarcido en un proceso fiscal, sino solo aquél que se encuentre debidamente acreditado, y que además, se predique respecto de una entidad u organismo estatal en concreto. Lo previamente explicado fue analizado tal y como se expone a continuación:

"La responsabilidad fiscal estará integrada por una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, un daño patrimonial al Estado y un nexo entre los dos elementos anteriores. **El daño patrimonial es toda disminución de los recursos del estado**, que cuando es causada por la conducta dolosa o gravemente culposa de un gestor fiscal, genera responsabilidad fiscal. En este orden de ideas, todo daño patrimonial, en última instancia, siempre afectará el patrimonio estatal en abstracto. Sin embargo, cuando se detecta un daño patrimonial en un organismo o entidad, el ente de control debe investigarlo y establecer la responsabilidad fiscal del servidor público frente a los recursos asignados a esa entidad u organismo, pues fueron solamente éstos los que estuvieron bajo su manejo y administración. **Es decir, que el daño por el cual responde se contrae al patrimonio de una entidad u organismo particular y concreto**".² (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

¹ Ibidem.

² Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 15 de noviembre de 2007. Radicado 11001-03-06-000-2007-00077-00(1852). C.P. Gustavo Aponte Santos.

En otras palabras, para que sea jurídicamente viable la declaratoria de responsabilidad fiscal en un proceso determinado, es esencial que el daño patrimonial al Estado se encuentre debidamente acreditado en el expediente.

Igualmente, conviene recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU - 620 de 1996, consideró que el daño patrimonial es uno de los elementos esenciales de la responsabilidad fiscal, y que el mismo debe cumplir las siguientes características:

*“(…) Para la estimación del daño debe acudir a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, **debe considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud.** En el proceso de determinación del monto del daño, por consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio (…)”³.*

Así las cosas, teniendo en cuenta lo manifestado por la Corte Constitucional, no podemos concluir de manera concreta y sin lugar a duda razonable que en el presente asunto se ocasionó la merma del erario público por el monto y bajo los argumentos que manifiesta el ente de control. De hecho, se observa que no se cumple con los requisitos exigidos, especialmente, el atinente a su certeza, pues en ninguno de los apartes que componen el auto de imputación se indica con claridad cuales fueron los pagos anuales que se realizaron a los once (11) funcionarios de la CÁMARA DE REPRESENTANTES y que, sumados, dan un total de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$896.044.974).

Por el contrario, el ente de control fiscal solo señaló que a dicha suma asciende el daño patrimonial, sin discriminar los pagos que anualmente se realizaron a los servidores públicos que, presuntamente, no cumplieron con los requisitos para acceder a la prima técnica, esto es: CAYO RICARDO BUITRAGO ESPEJO, HAROLD ALFONSO BUSTAMENTE SOTO, ROSALBA CARVAJAL PARRA, CARMENZA CRUZ PARRA, GIOVANNY DURLEY GONZALEZ COLORADO, DIANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, HUMBERTO GUERRERO ACOSTA, ITA MARÍA MARTINEZ LOZANO, AMANDA TINJACA RUÍZ, HERNANDO RODRÍGUEZ CASTILLA, y ALVARO TORRES TELLEZ.

Ahora bien, es notoria la incertidumbre respecto del daño patrimonial si se tiene en cuenta que desde el auto de apertura este se fijó en la suma ya enunciada, sin embargo, con posterioridad, se archivó la actuación fiscal contra los funcionarios CARLOS ANTONIO ARDILA BALLESTEROS, JAIRO JARAMILLO MATIZ y CARLOS ALBERTO FLÓREZ ROJAS porque, frente a ellos, operó el fenómeno de la caducidad de la acción fiscal, al haber suscrito la

³ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia SU-620 de 1996. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.

Resolución No. 686 de 17 de julio de 1998. En consideración a esto, los montos reconocidos y pagados con fundamento en este acto administrativo debieron haber sido excluidos del daño patrimonial, comoquiera que frente a estos operó la caducidad de la acción fiscal, no obstante, el ente fiscal mantuvo el valor del daño patrimonial establecido en el auto de apertura, lo que demuestra la falta de certeza sobre el mismo.

De otra parte, vemos que las resoluciones que dieron lugar al presente asunto fueron discutidas o se encuentran actualmente en discusión ante la jurisdicción contencioso administrativa, tal y como se evidencia en el cuadro citado en la página 15 del Auto No. URF 1 - 0277 del 27 de diciembre de 2022. De allí cabe destacar que existen varias resoluciones que aún se encuentran en debate judicial respecto de su legalidad, por lo que a día de hoy se presumen legales y, de manera alguna, pueden configurar un daño patrimonial.

Vemos entonces que la Resolución No. 1355 del 01 de junio de 2011, mediante la cual se otorgó la prima técnica a la señora ROSALBA CARVAJAL PARRA, fue demandada ante la jurisdicción contencioso administrativa y, pese a que mediante sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se negó el derecho de la funcionaria, actualmente, se encuentra en recurso extraordinario de revisión, lo que permite evidenciar que no hay certeza sobre la procedencia o no del beneficio a esta servidora.

Igual situación se presenta respecto a la Resolución No. 1349 del 01 de junio de 2011, por la cual se reconoció la prima técnica al señor GIOVANNY DURLEY GONZALEZ COLORADO, pues la demanda contra dicho acto administrativo actualmente se encuentra en recurso de apelación, que está siendo conocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Con relación a la Resolución No. 1346 del 01 de junio de 2011, mediante la cual se reconoció la prima técnica a la señora DIANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, es necesario señalar que su legalidad está siendo discutida actualmente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que también es evidente la falta de certeza respecto a la procedencia de dicho reconocimiento.

Esta misma circunstancia de incertidumbre se constata en la Resolución No. 1361 del 01 de junio de 2011, por la cual se reconoció la prima técnica a la señora ITA MARÍA MARTÍNEZ LONZANO, ya que la legalidad de este acto administrativo también está siendo discutida ante la jurisdicción contencioso administrativa, específicamente, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual suspendió provisionalmente sus efectos, decisión que fue recurrida y es objeto de conocimiento por el Consejo de Estado.

Por último, el ente de control fiscal debió excluir del daño patrimonial el monto reconocido al señor ALVARO TORRES TELLEZ por valor de \$195.113.831, bajo el entendido que en el mismo cuadro que viene de relacionarse, se recalcó que por *“fallo de 30 de junio de 2010 que ordena declarar la nulidad del acto de la Cámara de Representantes que niega el reconocimiento de la prima*

técnica, ordena reconocerlo y pagarlo”, de manera que este funcionario sí tenía derecho a que se le reconociera la prima técnica, por lo que los pagos realizados por este concepto fueron legales y no pueden considerarse como una merma al patrimonio de la CÁMARA DE REPRESENTANTES.

De otra parte, es menester señalar que todas las resoluciones objeto de discusión fueron demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de modo tal que la Contraloría General de la República debió considerar las decisiones tomadas por el juez competente respecto a aquellas cuya legalidad ya fue resuelta, pues en dichas decisiones pudo haberse ordenado que los funcionarios de la CÁMARA DE REPRESENTANTES devolvieran los recursos pagados por concepto de la prima técnica a la que no tenían derecho, toda vez que los efectos de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos implican que la situación jurídica se retrotraiga al estado en que se encontraba antes de su expedición.

En este punto, debe recordarse que para que se predique la existencia de daño patrimonial, este debe ser cierto y cuantificable, lo que supone la identificación concreta de la afectación al patrimonio público y, para el caso en concreto, no se señaló con claridad cuál es la merma al erario del Estado, dado que no hay certeza sobre la legalidad o ilegalidad de algunas de las resoluciones por las cuales se reconoció la prima técnica a los funcionarios de la CÁMARA DE REPRESENTANTES, incluso, hay un reconocimiento que fue avalado por el juez contencioso administrativo, por lo que debió haberse excluido de la cuantificación del daño patrimonial.

Por lo anterior, ante la inexistencia de un daño patrimonial causado en contra del Estado, es jurídicamente improcedente la declaratoria de responsabilidad fiscal y, consecuentemente, el Despacho imperativamente tendrá que archivar el proceso bajo análisis. Lo anterior, siguiendo lo consagrado en el artículo 47 de la ley 610 de 2000 el cual explica:

“ARTICULO 47. AUTO DE ARCHIVO. Habrá lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción de la misma.”

De esta forma, resulta conducente el archivo del presente proceso de responsabilidad fiscal.

B. EN EL PRESENTE CASO NO SE REÚNEN LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL - POR INEXISTENCIA DE CULPA GRAVE Y/O DOLO EN CABEZA DEL PRESUNTO RESPONSABLE

Es de suma importancia ponerle de presente al Despacho que, en cuanto la conducta dolosa o culposa atribuible al gestor fiscal, el grado del elemento culpa no puede ser uno distinto del dolo

o de la **culpa grave**, es decir, para que en un caso se encuentre plenamente acreditado el primero de los elementos de la responsabilidad fiscal, no es suficiente probar la existencia de culpa leve o levísima en el patrón de conducta del gestor, sino que dicho patrón constituya una actuación dolosa o **gravemente** culposa. Lo anterior, ha sido explicado puntualmente por la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C-619 de 2002, que declaró inexecutable específicamente el parágrafo segundo del artículo 4 de la Ley 610 de 2000, que fijaba a la culpa leve como requisito de configuración del primer elemento de la responsabilidad. En efecto, el tenor literal de la providencia de la Corte Constitucional que explica que el grado de culpa en la responsabilidad fiscal es únicamente aquél que demuestre una conducta dolosa o gravemente culposa, es el siguiente:

"6.4. Pero no sólo eso. El Legislador también está limitado por la manera como la Carta ha determinado la naturaleza de la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales en otros supuestos. Eso es así, si se repara en el hecho de que la ley no puede concebir un sistema de responsabilidad, como lo es el fiscal, rompiendo la relación de equilibrio que debe existir con aquellos regímenes de responsabilidad cuyos elementos axiológicos han sido señalados y descritos por el constituyente, para el caso, en el inciso 2° del artículo 90 de la Carta. Ello, en el entendido que, según lo dijo la Corte en la citada Sentencia SU-620 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), la responsabilidad fiscal es tan sólo una "especie de la responsabilidad que en general se puede exigir a los servidores públicos o a quienes desempeñen funciones públicas, por los actos que lesionan el servicio o el patrimonio público."

6.5. Y es precisamente en ese punto en donde resalta la contrariedad de las expresiones acusadas con el Texto Superior, toda vez que ellas establecen un régimen para la responsabilidad fiscal mucho más estricto que el configurado por el constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición (C.P. art. 90-2), pues en tanto que esta última remite al dolo o a la culpa grave del actor, en aquella el legislador desborda ese ámbito de responsabilidad y remite a la culpa leve. Así, mientras un agente estatal que no cumple gestión fiscal tiene la garantía y el convencimiento invencible de que su conducta leve o levísima nunca le generará responsabilidad patrimonial, en tanto ella por expresa disposición constitucional se limita sólo a los supuestos de dolo o culpa grave, el agente estatal que ha sido declarado responsable fiscalmente, de acuerdo con los apartes de las disposiciones demandadas, sabe que puede ser objeto de imputación no sólo por dolo o culpa grave, como en el caso de aquellos, sino también por culpa leve.

***6.6. Para la Corte, ese tratamiento vulnera el artículo 13 de la Carta pues configura un régimen de responsabilidad patrimonial en el ámbito fiscal que parte de un fundamento diferente y mucho más gravoso que el previsto por el constituyente para la responsabilidad patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición.** Esos dos regímenes de responsabilidad deben partir de un fundamento de imputación proporcional pues, al fin de cuentas, de lo que se trata es de resarcir el daño causado al Estado. En el caso de la responsabilidad patrimonial, a través de la producción de un daño antijurídico que la persona no estaba en la obligación de soportar*

y que generó una condena contra él, y, en el caso de la responsabilidad fiscal, como consecuencia del irregular desenvolvimiento de la gestión fiscal que se tenía a cargo.

(...)

6.10. En relación con esto último, valga destacar que la Corte, primero en la Sentencia C-046 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y luego en la Sentencia T-973 de 1999 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), advirtiendo el vacío legislativo dejado por la Ley 42 de 1993 -relativa a la organización del sistema de control fiscal financiero-, ya se había ocupado de reconocer el alto grado de afinidad temática existente entre la responsabilidad patrimonial y la responsabilidad fiscal, al establecer que a esta última le era aplicable el mismo término de caducidad fijado por el Código Contencioso Administrativo para la acción de reparación directa (C.C.A. art. 136-78). En efecto, recogiendo el criterio sentado en la providencia inicialmente citada, dijo la Corporación en la Sentencia T-973 de 1999, lo siguiente:

"El código contencioso administrativo establece en su artículo 136, subrogado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, los términos de caducidad de las acciones, que para el caso de la acción de reparación directa, se fija en dos años contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa. Y es este mismo término el que, por la remisión expresa que hace el artículo 89 de la ley 42 de 1993 a las normas del código contencioso administrativo, y dada la concordancia y afinidad que tiene con la acción de reparación directa, se aplica para el proceso de responsabilidad fiscal".

6.11. En consecuencia, queda pues superada aquella percepción equivocada, de que el daño patrimonial que le pueden causar al Estado los agentes que no cumplen función fiscal tiene tal grado de diferenciación con el perjuicio que le pueden causar los fiscalmente responsables, que justifica o admite respecto de los segundos un tratamiento de imputación mayor. **Por el contrario, visto el problema desde una óptica estrictamente constitucional, lo que se advierte es que la diferencia de trato que plantean las normas acusadas resulta altamente discriminatoria, en cuanto aquella se aplica a sujetos y tipos de responsabilidad que, por sus características y fines políticos, se encuentran en un mismo plano de igualdad material. En esta medida, el grado de culpa leve a que hacen referencia expresa los artículos 4º parágrafo 2º y 53 de la Ley 610 de 2000 es inconstitucional y será declarado inexecutable en la parte resolutive de esta Sentencia.**"⁴ (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En otras palabras, la Corte Constitucional fue completamente clara en su sentencia al establecer que el primero de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal única y exclusivamente se cumplirá en el evento que el patrón de conducta del gestor fiscal sea aquél que se enmarque en el dolo o la culpa grave. Lo anterior, a su vez genera indefectiblemente que para que pueda predicarse la responsabilidad fiscal respecto de determinada persona, es necesario demostrar que su actuación fue realizada de forma gravemente culposa o indiscutiblemente dolosa. Por supuesto, este planteamiento correlativamente impide declarar la responsabilidad fiscal en

⁴ Corte Constitucional, C-619-2002, MP. Rodrigo Escobar Gil y Jaime Córdoba Triviño.

aquellos eventos en los cuales la actuación del gestor fiscal se enmarque únicamente dentro de la culpa leve o levísima.

Señalado lo anterior, resulta de gran importancia examinar si la actuación de los presuntos responsables fiscales puede ser catalogada como una conducta dolosa o gravemente culposa, a la luz de los elementos probatorios que obran en el plenario. En este sentido, se deben iniciar abordando los conceptos de culpa grave y dolo, que por mandato del artículo 63 del Código Civil, son conceptos que deben asimilarse cuando se realizan análisis de responsabilidad.

En este orden de ideas, el artículo 63 del Código Civil define la culpa grave de la siguiente forma:

“ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

*Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, **es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios**. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.”* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Frente al particular, la Corte Suprema de justicia definió el concepto de culpa grave tal y como se evidencia a continuación:

*“Con esa orientación es que autorizados doctrinantes han precisado que la culpa grave comporta **‘una negligencia, imprudencia o impericia extremas, no prever o comprender lo que todos prevén o comprenden, omitir los cuidados más elementales, descuidar la diligencia más pueril, ignorar los conocimientos más comunes’** (Mosset Iturraspe J., Responsabilidad por daños, T. I., Ediar, Buenos Aires, 1971, pág.89; citado por Stiglitz Rubén S., Derecho de Seguros, T.I., Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 1998, pág.228).”⁵* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En resumen, la culpa grave es un concepto jurídico que puede identificarse con todos aquellos comportamientos supremamente negligentes que son llevados a cabo por parte de las personas más descuidadas. Ahora, en lo que respecta al dolo, nuevamente se debe abordar el ya analizado artículo 63 del C.C., el cual explica:

“ARTICULO 63. <CULPA Y DOLO>. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

***El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro**.”* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Frente al particular, La Corte Suprema de justicia definió el concepto de dolo tal y como se evidencia a continuación:

“[l]as voces utilizadas por la ley (Art. 63 C.C.) para definir el dolo concuerdan con la noción doctrinaria que lo sitúa y destaca en cualquier pretensión de alcanzar un

⁵ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de julio de 2014. Mp. Ruth Marina Díaz Rueda. Exp. 11001-3103-015-2008-00102-01

resultado contrario al derecho, caracterizada por la conciencia de quebrantar una obligación o de vulnerar un interés jurídico ajeno; el dolo se constituye pues, por la intención maliciosa (...)" (subrayado y negrilla fuera del texto original)⁶.

En otras palabras, para endilgar responsabilidad fiscal es indispensable que, utilizando los elementos probatorios conducentes, pertinentes y útiles, se acredite indefectiblemente un patrón de conducta supremamente negligente que se asimile al de las personas más descuidadas, o a la intención positiva de causar un menoscabo al patrimonio público.

Ahora bien, al analizar el acervo probatorio que obra en el plenario, resulta fundamental ponerle de presente al Despacho que ninguna de las pruebas que han sido allegadas permiten acreditar una conducta dolosa o gravemente culposa en cabeza de los presuntos responsables. Por el contrario, de la totalidad de los elementos probatorios que obran en el expediente, se logra vislumbrar un patrón de conducta diligente, por cuanto se encuentran totalmente demostradas una serie de actuaciones en cabeza de los investigados, tendientes al cumplimiento de sus deberes legales y reglamentarios.

En este sentido, es importante resaltar que, como se indicó en el acápite correspondiente al daño, todas las resoluciones que dieron origen a la presente actuación fueron demandadas ante la jurisdicción contencioso administrativa, lo que de por sí evidencia que existe una discusión interpretativa y jurídica con relación a la legalidad de dichos actos administrativos y, en esta medida, no es posible endilgar culpa grave o dolo a las funcionarias que dieron su visto bueno a la expedición de dichas resoluciones.

Por otra parte, el ente de control fiscal adujo que la señora DIANA ROJAS BRIÑEZ, en su calidad de Jefe de División de Personal de la CÁMARA DE REPRESENTANTES, desconoció las funciones inherentes a su cargo, como las de: *"2. Asesorar a la Mesa Directiva y a la Dirección Administrativa en la proyección de resoluciones y demás actos administrativos, referentes a novedades de personal, (nombramientos, vacaciones, licencias, insubsistencias, renunciaciones, permisos, judicaturas) y, "3. Velar por el cumplimiento y aplicación de las normas y demás disposición de administración de personal, gerenciando el recurso humano de la Corporación"*.

No obstante, de dichas funciones no se desprende que esta funcionaria deba o haya debido verificar el cumplimiento de requisitos de los servidores de la CÁMARA DE REPRESENTANTES para acceder a la prima técnica y, mucho menos, que estuviera facultada para reconocer dicho beneficio, pues solo asesoraba a la Mesa Directa para la proyección de nombramientos, vacaciones, licencias, insubsistencias, renunciaciones, permisos y judicaturas, más no el reconocimiento de emolumentos de carácter prestacional, como en el caso.

6 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 5 de julio de 2012. Mp Fernando Giraldo Gutiérrez, EXP 0500131030082005-00425-01

Con fundamento en lo anterior, es claro que no existe prueba de que esta servidora haya incurrido en una conducta dolosa o gravemente culposa al, presuntamente, haber dado visto bueno a las resoluciones que reconocieron una prima técnica a once (11) funcionarios de la CÁMARA DE REPRESENTANTES.

En igual medida, se indicó que la señora BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA, en su condición de Jefe de la División Financiera de la CÁMARA DE REPRESENTANTES, debía: “1. *Dirigir, coordinar, controlar y supervisar la ejecución presupuestal de los recursos financieros de la Corporación*”, sin embargo, dentro de sus funciones no se encontraba la verificación de requisitos y/o aprobación de primas técnicas a servidores de la CÁMARA DE REPRESENTANTES, de modo que resulta claro que esta funcionaria no incurrió en conducta dolosa o gravemente culposa.

Lo anterior, si se considera que el artículo 9 del Decreto 2164 de 1991 establece con relación al procedimiento para la asignación de la prima técnica, lo siguiente:

“ARTÍCULO 9º.- Del procedimiento para la asignación de la prima técnica. El empleado que ocupe, en propiedad, un empleo susceptible de asignación de prima técnica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del presente Decreto, presentará, por escrito, al Jefe de Personal o a quien haga sus veces, la solicitud de asignación de prima técnica, acompañada de los documentos que legalmente acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Una vez reunida la documentación, el Jefe de Personal o quien haga sus veces, verificará dentro de un término máximo de dos (2) meses, si el solicitante acredita los requisitos para la asignación de la prima técnica.

Si el empleado llenare los requisitos, el Jefe del organismo proferirá la resolución de asignación, debidamente motivada.

PARÁGRAFO. - En todo caso, la prima técnica sólo podrá otorgarse previa la expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal”.

Como se observa, el Jefe de la División Financiera no actúa dentro del procedimiento para la asignación de la prima técnica, pues no tiene dentro de sus funciones el verificar el cumplimiento de requisitos o expedir la resolución de asignación, lo cual hace evidente que la señora BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA no pudo incurrir en conducta dolosa o gravemente culposa al no tener funciones relacionadas con el reconocimiento de la prima técnica a funcionarios de la CÁMARA DE REPRESENTANTES.

Así las cosas, en ningún escenario la conducta de las funcionarias puede ser catalogada como una actuación negligente que se asimile al de las personas más descuidadas (gravemente

culposa), o con una intención positiva y maliciosa de causar un daño al patrimonio público (dolosa), toda vez que existen elementos probatorios, conducentes, pertinentes y útiles que sin duda alguna acreditan una preocupación por cumplir con sus funciones, de suerte que, al no existir prueba fehaciente del elemento que aquí se discute, corresponderá al ente de control declarar su inexistencia y proceder con el archivo del proceso.

De otro lado y antes de concluir, vale la pena traer a colación la disposición contemplada en el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, que respecto de la posibilidad, excepcional, de la presunción de culpa y dolo establece lo siguiente, lo cual confirma que en este caso no es aplicable tal presunción:

“ARTÍCULO 118. DETERMINACIÓN DE LA CULPABILIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL. *El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el dolo o la culpa grave.*

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese título.

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos:

a) Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o términos de referencia en forma incompleta, ambigua o confusa, que hubieran conducido a interpretaciones o decisiones técnicas que afectaran la integridad patrimonial de la entidad contratante;

b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado;

c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas;

d) Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos;

e) Cuando se haya efectuado el reconocimiento de salarios, prestaciones y demás emolumentos y haberes laborales con violación de las normas que rigen el ejercicio de la función pública o las relaciones laborales.”

Frente a lo anterior, ha de decirse desde ahora que no cabe en este caso la presunción de dolo o culpa grave, ni tampoco hay prueba de esos elementos subjetivos pero esenciales para la posibilidad de que surja una responsabilidad fiscal. En este orden, resulta claro que ante la

inexistencia de cualquier elemento probatorio que dé cuenta de una condena penal o sanción disciplinaria impuesta al presunto responsable por los hechos materia de investigación, por ningún motivo, se hace presumible el elemento que aquí se estudia. Lo mismo ocurre con las causales que presuponen un actuar culposos, pues lo cierto es que en ninguna de ellas se enmarca lo ocurrido en el *sub judice*.

En conclusión, luego de haber analizado la totalidad de las pruebas que obran en el expediente, es claro que de ninguna manera puede endilgarse una actuación dolosa o gravemente culposa a DIANA ROJAS BRÍÑEZ y BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA. Sin embargo, si por alguna razón el honorable Despacho llega a considerar que su actuación contiene elementos subjetivos que comportan la culpa, resulta fundamental que tenga en cuenta que, aún en ese improbable evento, dicho elemento de ninguna forma puede ser catalogado como gravemente culposos o doloso. En consecuencia, al faltar el elemento de la culpa grave y/o dolo en el patrón de conducta del implicado, es jurídicamente improcedente una declaratoria de responsabilidad fiscal de esta naturaleza.

Por esta razón, ante la inexistencia de una conducta dolosa o gravemente culposa en cabeza de los presuntos responsables, automáticamente se desvirtúa la posibilidad de estatuir un nexo de causalidad entre lo endilgado y el supuesto detrimento, de suerte que no concurren los elementos *sine qua non* para que se estructure la responsabilidad fiscal en cabeza de los investigados por lo cual resulta jurídicamente improcedente proferir Fallo de Responsabilidad Fiscal en este proceso, no quedando otro camino que su archivo.

IV. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS DE LA DEFENSA FRENTE A LA VINCULACIÓN DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.

Antes de referirme a las razones por las cuales la CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL 1 de la CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL, INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO deberá desvincular a mi representada en calidad de tercero civilmente responsable, es pertinente precisar que, al momento de proferirse el auto de apertura dentro del presente trámite, en el cual se ordenó la vinculación de la Compañía de Seguros que represento, se omitió efectuar el estudio de las condiciones particulares y generales del contrato de seguro. En efecto, el Honorable Juzgador no tuvo en cuenta que la póliza incorporada en el expediente no goza de ningún tipo de cobertura, lo cual indudablemente contraviene el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, el cual dispone:

“Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentren amparados por una póliza, se vinculará al proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado. La vinculación se surtirá mediante la comunicación del auto de apertura del proceso al representante legal

o al apoderado designado por éste, con la indicación del motivo de procedencia de aquella.”

Sobre el particular, se ha pronunciado el Honorable Consejo de Estado, Sección Primera, consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso, radicación No. 25000-23-24-000-2002-00907-01, al señalar:

*“El papel que juega el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el contrato o el bien amparados por una póliza. **Es decir, la vinculación del garante está determinada por el riesgo amparado**, en estos casos la afectación de patrimonio público por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, la conducta de los servidores públicos y los bienes amparados, pues de lo contrario **la norma acusada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no amparados por ellas.**”*

(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En ese contexto, la vinculación del garante se encuentra circunscrita al riesgo amparado, pues de lo contrario, la norma ya mencionada resultaría desproporcionada si comprendiera el deber para las compañías de seguros de garantizar riesgos no cubiertos por ellas.

Ahora, es importante tener en cuenta que para efectuar la vinculación de una compañía de seguros deben considerarse y acatarse las directrices planteadas en el instructivo No. 82113-001199 del 19 de junio de 2002, proferido por la Contraloría General de la Republica. Este instructivo regula y aclara el procedimiento de vinculación del asegurador a los Procesos de Responsabilidad Fiscal a que se refiere el Artículo 44 de la Ley 610 de 2000.

De este modo, en aquel documento se estableció que, antes de vincular a una aseguradora, deben observarse algunos aspectos fundamentales respecto de la naturaleza del vínculo jurídico concretado en el contrato de seguros correspondiente. Por cuanto de la correcta concepción de esa relación convencional, se puede determinar si se debe o no hacer efectiva la garantía constituida en las pólizas.

El citado instructivo emitido con base en la Ley 610 de 2000, precisó las condiciones o requisitos para la procedencia de la vinculación de las aseguradoras a los procesos de responsabilidad fiscal, determinando que:

“(…) 2. Cuando se vinculan...-las aseguradoras- se deben observar las siguientes situaciones:

*a) **Verificar la correspondencia entre la causa que genera el detrimento de tipo fiscal y el riesgo amparado**: Por ejemplo: Si se responsabiliza por sobrecostos en un contrato y la póliza cubre únicamente el cumplimiento y calidad del objeto contratado,*

no hay lugar a vincularla, por cuanto los sobrecostos no son un riesgo amparado y escapan al objeto del seguro.

b) **Establecer las condiciones particulares pactadas en el contrato de seguro, tales como vigencia de la póliza, valor asegurado, nombre de los afianzados, existencia de un deducible**, etc., eso para conocer el alcance de la garantía, toda vez que de estas condiciones se desprenderá la viabilidad de la vinculación de la Compañía aseguradora al proceso.

c) **Examinar el fenómeno de la prescripción**, que si bien es cierto, por vía del art. 1081 del Código de Comercio, es de dos años la ordinaria y de cinco la extraordinaria (...)” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Vale la pena mencionar, que este instructivo debe ser interpretado armónicamente con la Circular No. 005 proferida por la Contraloría General de la Nación el 16 de marzo de 2020, la cual fue sumamente clara al puntualizar y exigir el cumplimiento de lo siguiente:

“En aras de brindar mayor claridad frente a la vinculación de las compañías aseguradoras en los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República y como parte de la política de prevención del daño antijurídico que ha adoptado la entidad para el presente año, a continuación se resaltan algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta por los operadores jurídicos, relacionados con la mencionada vinculación de dichas compañías como garantes dentro de los procesos de responsabilidad fiscal:

- *Las compañías de seguros no son gestores fiscales, por ende, **su responsabilidad se limita a la asunción de ciertos riesgos en las condiciones previstas en el contrato de seguros.***

- *Las obligaciones de la aseguradora tienen límites, entre otros, la suma asegurada, la vigencia, los amparos, las exclusiones, los deducibles, los siniestros, establecidos en el clausulado del contrato de seguros correspondiente.*

- *De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, la vinculación como garante de una compañía aseguradora se da, ya sea porque el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recae el objeto del proceso se encuentra amparado por una póliza.*

(...)

- *Teniendo en cuenta el hecho generador sobre el que recae el proceso de responsabilidad fiscal, el mismo debe contrastarse con los siniestros cubierto por las pólizas de seguros que potencialmente se afectarán y a partir de allí analizar las condiciones generales y particulares del contrato de seguros, la base o modalidad (ocurrencia, descubrimiento, reclamación o "claims made", etc.) de la cobertura del seguro que se pretende afectar y las demás condicione del contrato, con miras a*

determinar tempranamente y con absoluta claridad cuál es la póliza llamada a responder (en virtud a la vigencia, el ramo de seguros, etc.).

•Es importante que, además de identificar la modalidad de cobertura, el operador fiscal verifique los demás elementos de la póliza, como su periodo de prescripción, de retroactividad, las exclusiones que establezca, sus amparos, deducible, valor y de ser posible determinar si la misma ya había sido afectada, lo cual puede afectar la suma asegurada.

• El operador fiscal debe identificar con absoluta claridad cuáles son las modalidades de cobertura (descubrimiento, ocurrencia, o reclamación claims made), **así como su vigencia, los periodos de cobertura temporal retroactiva o no de las respectivas pólizas**, y demás condiciones, para determinar cuál de ellas se afectará en curso del proceso de responsabilidad fiscal. En caso de tratarse de la modalidad de seguros de ocurrencia, la póliza a ser afectada debe ser aquella que se encontraba vigente para el momento de acaecimiento del hecho que genere la pérdida del recurso público. Si la modalidad es por descubrimiento, la póliza afectada será la que se encontraba vigente a la fecha en que se tuvo conocimiento del hecho que origine la pérdida o solicitud de indemnización. Y si la modalidad del seguro es por reclamación o "claims made", deberá afectarse la póliza vigente al momento de proferir el auto de apertura o de vinculación de la aseguradora.

• El operador fiscal deberá verificar que no se realice una indebida acumulación

de vigencias o de valores asegurados de las pólizas de seguros y en consecuencia la vinculación de la aseguradora se hará con sujeción a la respectiva modalidad prevista en el contrato de seguro.

•El operador fiscal dentro del ejercicio de verificación antes señalado, debe analizar tanto las condiciones generales como particulares en las cuales se determinan las coberturas y exclusiones de la póliza, vinculando únicamente el valor del amparo al que se refiere el hecho investigado.

(...)

Se considera de la mayor importancia que, en lo sucesivo, se realice el estudio temprano, oportuno e integral de todas las pólizas de seguros que puedan llevar a la declaratoria de responsabilidad civil dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 389 de 1997, el Código de Comercio y las cláusulas contractuales de los respectivos contratos de seguros, en armonía con las normas especiales que regulan el proceso de responsabilidad fiscal.^[1] (...) (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Conforme a lo anterior, es claro que la vinculación de la aseguradora debe estar condicionada a la estricta observancia o análisis previo de las pólizas invocadas para efectuar su vinculación,

debiendo sujetarse a las condiciones contractuales del aseguramiento, independientemente del carácter y magnitud de la eventual infracción fiscal. Lo anterior, para determinar si es o no procedente su vinculación, siempre que no se configure alguna causal de inoperancia del contrato de seguro.

En efecto, como lo ha manifestado el Honorable Consejo de Estado, Sección Primera, en el fallo del 18 de marzo de 2010, la vinculación de las compañías de seguros no se efectúa a título de responsable fiscal, sino de tercero civilmente responsable, precisamente en razón a que su participación en el proceso se deriva única y exclusivamente del contrato de seguro y no de algún acto fiscal, o de una conducta suya que pudiera resultar lesiva para el erario público. Es por esto, que su responsabilidad se circunscribe a una de tipo civil o contractual, pero no fiscal, debiendo regirse precisamente por lo establecido en el derecho comercial sobre este particular.

En el caso particular, es evidente que el ente de control no efectuó el análisis y estudio de las condiciones pactadas en las Pólizas de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000524 y No. 8001000636 expedidas por AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., limitándose exclusivamente a enunciar su existencia. Es evidente que, de haberse realizado el respectivo examen, definitivamente la conclusión sería que los hechos objeto de la acción fiscal no se encuentran cubiertos bajo el contrato de seguro documentado en la póliza antes referida.

Dicho lo anterior, se presentarán los argumentos por los cuales se solicita la desvinculación de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., así:

A. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE SEGURO – ARTÍCULO 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

Sin perjuicio de la totalidad de argumentos que se han venido esgrimiendo, es importante tener en cuenta que el artículo 1081 del Estatuto Comercial establece que las acciones derivadas de los contratos de seguro prescriben en el término de dos años. Dicho precepto establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.

Estos términos no pueden ser modificados por las partes.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Adicionalmente, es de suma importancia tomar en consideración que el Consejo de Estado, máxima autoridad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ha sido completamente claro al establecer que la prescripción derivada de las acciones del contrato de seguro, esto es, la evidenciada en el artículo 1081 del C. Co, puede ser alegada, y debe ser reconocida, cuando se configure en los procesos por responsabilidad fiscal. En otras palabras, teniendo en cuenta que el garante en este tipo de procesos se vincula como tercero civilmente responsable, es completamente claro que puede alegar en su defensa la prescripción de las acciones derivadas de la relación aseguraticia, tal y como se explica en el siguiente pronunciamiento:

“Aplicabilidad del artículo 1081 del C. Co. al sub lite. Despachar esta imputación implica precisar si esa norma es aplicable o no en caso de vinculación del garante como civilmente responsable en un proceso de responsabilidad fiscal, según el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, debiéndose responder que sí, puesto que tal vinculación no es a título de acción por responsabilidad fiscal, sino por responsabilidad civil, esto es, por razones inherentes al objeto del contrato de seguro, esto es, derivada únicamente del contrato que se ha celebrado, que por lo demás es de derecho comercial, y no de gestión fiscal alguna o conducta lesiva del erario por parte del garante, de allí que la responsabilidad que se llegue a declarar es igualmente civil o contractual, y nunca fiscal. La misma entidad apelante así lo reconoce al manifestar en la sustentación del recurso, que se debe aclarar que la vinculación no se hace mediante acción fiscal, sino como tercero civilmente responsable. Téngase en cuenta que según el artículo 1º de la citada ley, “El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.”” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Vale la pena mencionar, que no solamente el fallo previamente citado exige expresamente el reconocimiento por parte de la Contraloría de la prescripción de la acción derivada de contrato de seguro cuando haya lugar, sino que, además, existen una pluralidad de decisiones en el mismo sentido, como la que se expone a continuación:

“...tal vinculación no es a título de acción por responsabilidad fiscal, sino por responsabilidad civil, esto es, por razones inherentes al objeto del contrato de seguros, esto es, derivada únicamente del contrato que se ha celebrado, que por lo demás es de derecho comercial, y no de gestión fiscal alguna o conducta lesiva del erario por parte

⁷ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 20 de noviembre de 2011. CP Marco Antonio Velilla Moreno. Ref 250002324000200600428

del garante, de allí que la responsabilidad que se llegue a declarar es igualmente civil o contractual, y nunca fiscal...

(...)

Dicho de otra forma, por efecto de ese precepto, la Contraloría pasa a ocupar el lugar del beneficiario de la póliza, que de suyo es el contratante, cuando éste no haya ordenado hacerla efectiva en el evento de la ocurrencia del siniestro, como todo indica que aquí sucedió.

...Al respecto, se ha de advertir que la acción tendiente a declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la póliza, en la que se encuadra la vinculación del garante autorizada en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, no es una acción ejecutiva o de cobro coactivo, pues antes de que ella culmine no hay título que ejecutar; sino declarativa y constitutiva, toda vez que ella se ha de surtir justamente para constituir el título ejecutivo, que lo conformará la póliza y el acto administrativo en firme que declare la ocurrencia del siniestro y ordenar hacer efectiva la póliza; de allí que en tal situación se esté ante un título ejecutivo complejo.

...De suerte que la entidad de control tiene una caza confusión sobre esas dos acciones, y sirva la oportunidad para dejar en claro que si bien están entrelazadas, son totalmente diferentes, de las cuales una debe surtir primero para que sea posible la otra, incluso con sujeción a regulaciones procesales distintas.

Por no tratarse, entonces, de una vinculación por responsabilidad fiscal ni de una acción de cobro coactivo, sino una acción derivada del contrato de seguros, es aplicable la prescripción del artículo 1081 del C.Co. y no el término de caducidad previsto en el artículo 9º de la ley 610 de 2000, como tampoco el señalado en el artículo 66, numeral 3, del C.C.A., para vincular al garante como civilmente responsable... (Subrayado y negrilla fuera de texto original)⁸

Por otro lado, el Consejo de Estado ha establecido que la prescripción respecto de los daños ocasionados como consecuencia del incumplimientos de obligaciones contractuales comienza a contar a partir del momento en que se configura dicho incumplimiento, expresando dicha postura de la siguiente forma:

“CAUSA GENERADORA DEL DAÑO [S]e debe precisar que la declaratoria de nulidad de actos administrativos contractuales -como la de cualquier otro acto administrativo- no solo obliga a restablecer los derechos afectados, sino que, también, puede ser fuente de responsabilidad, si es que con aquél se ha causado un daño. Es importante advertir que la responsabilidad que se puede originar en razón de la nulidad de un acto administrativo de naturaleza contractual difiere de la que se puede generar con ocasión del incumplimiento de las obligaciones de un contrato. Mientras que la primera surge por la transgresión de los elementos que la ley exige para que la administración exprese

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente Dr. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA del 18 de marzo de 2010.

válidamente su voluntad a través de actos administrativos con proyección directa y mediata frente a los derechos de los administrados o los intereses jurídicamente tutelados, la responsabilidad contractual se funda en que el deudor de una prestación deja de ejecutar, parcial o totalmente, una obligación de dar, de hacer o de no hacer que le es debida al acreedor de conformidad con lo pactado en el negocio jurídico. En ese sentido, el hecho de que una facultad exorbitante que proviene de la ley artículo 18, Ley 80 de 1993 y no de un pacto sea ejercida en contravención de los postulados normativos no desemboca en el incumplimiento del contrato. Vale precisar que esta distinción de modo alguno recorta el derecho que tiene quien sufrió un daño como consecuencia de la expedición y posterior anulación de los actos administrativos contractuales; lo que permite es identificar cuál es la fuente del daño que se reclama”⁹.

Así las cosas, el operador jurídico debió analizar la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro a partir del hecho generador del daño que, de acuerdo con los argumentos esbozados en el acápite de caducidad de la acción fiscal, se configuró con la expedición de las Resoluciones No. 1356, 1354, 1348, 1352, 1349, 1346, 1350, 1358, 1361 y 1355, **el 01 de junio de 2011**. En ese entendido, al configurarse el presunto daño desde este momento, la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro ya se configuró, pues transcurrieron más de cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho, tiempo requerido para que opere la prescripción extraordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro.

Esto es así, teniendo en cuenta que las pólizas por las que se vinculó a mi prohiada al presente proceso de responsabilidad fiscal tienen vigencia entre el 16 de junio de 2010 y el 19 de junio de 2012. Así las cosas, solo los hechos ocurridos durante esta vigencia estarían amparados por las pólizas y, de ser así, como ya se advirtió, operó el fenómeno de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, comoquiera que la vinculación de mi prohiada se realizó hasta el 13 de diciembre de 2022, esto es, más de diez (10) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño patrimonial, y más de nueve (9) años desde la última fecha de vigencia de las pólizas por las cuales se vinculó a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

Por lo anterior, se debe tener en cuenta que en el caso concreto se configuró la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro por el cual se vinculó a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., a luces de lo establecido en la normatividad vigente y en la jurisprudencia, toda vez que la ocurrencia de los hechos materia de investigación fiscal del presente proceso acaecieron el 01 de junio de 2011, de manera que, a la fecha en que se notificó la vinculación transcurrieron 10 años, 6 meses y 12 días, resultando claro que operó el fenómeno de la prescripción extintiva.

⁹ Consejo de Estado, Sección Tercera. Número de expediente: 76001-23-31-000-2007-00092-05. Sentencia del 11 de octubre de 2021.

Conforme lo expuesto, se solicita al Honorable Juzgador Fiscal proceder con la desvinculación de mi prohijada y proferir fallo sin responsabilidad con el correspondiente cierre y archivo de las diligencias.

B. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA POR FALTA DE COBERTURA TEMPORAL DE LAS PÓLIZAS DE MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES No. 8001000524 Y 8001000636

En gracia de discusión, tal y como se expuso en el acápite correspondiente a la caducidad de la acción fiscal, si se considerara que el daño patrimonial se configuró entre los años 2011 a 2015, en virtud del reconocimiento de pagos indebidos por concepto de una prima técnica a once (11) funcionarios de la CÁMARA DE REPRESENTANTES, es claro que las Pólizas de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000524 y No. 8001000636 carecen de cobertura temporal respecto a estos hechos, pues la última de las pólizas tiene una vigencia entre el 8 de diciembre de 2011 y el 19 de junio de 2012.

Así lo reconoció la Contraloría General de la República en el Auto No. URF1-0271 del 13 de diciembre de 2022 *“por el cual se vincula un tercero civilmente responsable dentro del PRF – 88112-2017-002”*, en los siguientes términos:

- Póliza No. 8001000524, certificado 0, Seguros Colpatria S.A. vigencia desde 16 de junio de 2010, hasta 16 de junio de 2011.
- Póliza No. 8001000524, certificado 1, Seguros Colpatria S.A. vigencia desde 16 de junio de 2011, hasta 1 de agosto de 2011.
- Póliza No. 8001000524, certificado 2, Seguros Colpatria S.A. vigencia desde 1 de agosto de 2011 hasta 1 de octubre de 2011.
- Póliza No. 8001000524, certificado 3, Seguros Colpatria S.A. vigencia desde 1 de octubre de 2011 hasta 15 de noviembre de 2011.
- Póliza No. 8001000524, certificado 4, Seguros Colpatria S.A. vigencia desde 15 de noviembre de 2011 hasta 8 de diciembre de 2011.
- Póliza No. 8001000636, certificado 0, Seguros Colpatria S.A. vigencia desde 8 de diciembre de 2011 hasta 19 de junio de 2012.

Así pues, si el último hecho generador del daño se configuró en el año 2015, tal y como lo expone el ente de control fiscal en el auto de imputación, es evidente que este no tiene cobertura temporal por las Pólizas No. 8001000524 y No. 8001000636, dado que estas tienen una vigencia hasta el 19 de junio de 2012.

Ahora, si en gracia de discusión se considerara que no hubo un hecho continuado, sino hubo varios hechos, mi representada tampoco estaría llamada a responder en el presente asunto, pues los hechos configurados con posterioridad al 19 de junio de 2012 carecen de cobertura temporal

y, frente aquellos configurados con antelación, operó el fenómeno de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.

De manera tal que, al no ocurrir el hecho generador del daño dentro de la vigencia de las pólizas, no existe cobertura temporal de la presunta responsabilidad de los funcionarios de la CÁMARA DE REPRESENTANTES y no surge obligación indemnizatoria de parte de mi representada.

En consecuencia, el honorable Despacho no tiene una alternativa diferente que desvincular a la AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. del proceso de responsabilidad fiscal.

C. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA POR CUANTO NO SE CUMPLIERON LAS CONDICIONES DE COBERTURA EN EL PRESENTE CASO

Sin perjuicio de los argumentos esbozados que enervan la responsabilidad fiscal endilgada, es fundamental que el Honorable Despacho tome en consideración que, en el ámbito de la libertad contractual que les asiste a las partes en el contrato de seguro, la compañía aseguradora, en virtud de la facultad que se consagra en el artículo 1056 del Código de Comercio, puede asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés asegurado. Es de esta forma, como se explica que al suscribir el contrato aseguratorio respectivo, la aseguradora decide otorgar determinados amparos supeditados al cumplimiento de ciertas condiciones generales y particulares estipuladas en el mismo, de tal manera que su obligación condicional solo será exigible si se cumplen con los presupuestos que hayan sido pactados por las partes.

En otras palabras, las compañías aseguradoras tienen la prerrogativa de escoger cuáles son los riesgos que le son transferidos, las condiciones de amparo y en este sentido, solo se ven obligadas al pago de la indemnización en el evento que sean estos riesgos los que acontezcan durante el desarrollo de la relación contractual. La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al resaltar que las compañías aseguradoras pueden, a su arbitrio, asumir los riesgos que consideren pertinentes:

*(...) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual **se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado**”.*

Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la materia, no absoluto, según se anunció en líneas pretéritas, se tiene, de conformidad con las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la póliza y sus anexos

donde el intérprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con el respectivo contrato asegurativo. Lo anterior por cuanto, de suyo, la póliza ha de contener una descripción de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinación de los eventos amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en razón de la mención específica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados) (...). (Subrayado y negrilla fuera del texto original)¹⁰

Lo anteriormente mencionado, debe ser interpretado armónicamente con los principios generales del Derecho Comercial denominados “autonomía de la voluntad” y “buena fe”, tal como lo explica la Corte Constitucional en sentencia T-065 de 2015, de la siguiente manera:

“La celebración y ejecución de los contratos civiles y comerciales debe desarrollarse de acuerdo con los principios de la autonomía de la voluntad y la buena fe. Así lo señala el Código Civil en sus artículos 1602 y 1603, y la Constitución Política en su artículo 83. El primero de estos principios, también conocido como *pacta sunt servanda*, establece que las personas naturales o jurídicas tienen la facultad de contraer libremente obligaciones y/o derechos mediante la celebración de contratos. Una vez manifiestan allí su voluntad y llegan a un acuerdo, el contrato se transforma en una ley para las partes. Su terminación queda sujeta a la realización de un nuevo acuerdo, o al cumplimiento de una de las causales previstas en la ley o en el mismo contrato. Por lo tanto, mientras no hayan establecido otra cosa, ninguna de ellas queda autorizada para alterar los términos contractuales de manera unilateral porque, de lo contrario, le impondría a la otra una obligación, o le concedería un derecho que jamás consintió. Lo anterior implica que, por regla general y sin perjuicio de las excepciones consagradas en la ley, cualquier modificación de un contrato debe estar sometida al concurso de todas las personas que lo celebraron.

[...]

5.3. Según lo ha puesto de presente la jurisprudencia de la Corte, **tratándose específicamente de un contrato de seguro, la buena fe que se espera de las partes es cualificada.** Es decir, que la persona no solo debe tener conciencia de celebrar y ejecutar el contrato de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y la finalidad que persiguen los firmantes. Sino que, además, debe tener certeza de que efectivamente lo está haciendo. De esta manera, la buena fe aplicable a este tipo de situaciones exige un elemento subjetivo, que se refiere a la intención del actor, y un objetivo, que tiene que ver con la efectiva realización del comportamiento esperado.

5.4. **En conclusión, la celebración y ejecución de un contrato de acuerdo con los principios de la autonomía de la voluntad y la buena fe, le permite a cada uno de los contratantes confiar en la palabra del otro y tener una expectativa cierta de los efectos jurídicos del acuerdo celebrado.** De esta manera, la alteración unilateral de alguno de los términos contractuales, o su lectura literal y maliciosa, se traducirían

¹⁰ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de septiembre de 2015, MP. Ariel Salazar Ramírez, radicado 11001-02-03-000-2015-02084-00

en un acto sorpresivo que traicionaría la confianza depositada.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

De conformidad con la facultad otorgada por el artículo 1056 del Código de Comercio, las partes intervinientes en el contrato de seguro vinculado al presente proceso fiscal pactaron las condiciones de cobertura, conviniendo que el objeto del seguro se restringe a amparar el MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES ESTATALES, así:

*“Seguros Colpatria S.A., que en adelante se denominará Colpatria, indemnizará con sujeción a las condiciones, amparos y límite de valor asegurado, consignados en la presente póliza, la pérdida económica que sufra la entidad estatal **a consecuencia de actos que se tipifiquen como delitos contra la administración pública**, cometidos por empleado(s) en el desempeño del(os) cargo(s) indicado(s) en la solicitud, en la carátula de la póliza o en sus anexos, **siempre y cuando sean descubiertos durante la vigencia del seguro**, y ocurridos durante el periodo comprendido entre la fecha de efecto y la fecha de terminación del seguro, de acuerdo con los siguientes amparos, salvo lo dispuesto en la condición 1.3 “exclusiones.*

1.1.1. RESPONSABILIDAD FISCAL

*Este amparo cubre las pérdidas económicas reclamadas mediante proceso de responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial que sufra la entidad estatal **exclusivamente en el evento que el proceso se adelante por delitos contra la administración pública cometidos en ejercicio de los cargos indicados** en la solicitud siempre y cuando los hechos objeto del proceso fiscal se ajusten a los amparos y condiciones consignadas en la presente póliza, particularmente las relativas al valor asegurado, vigencia de las coberturas y exclusiones y que la reclamación se efectúe dentro de los términos señalados en el art. 1081 del Código de Comercio”.*

De lo anterior se desprende que, para el caso concreto, la modalidad de cobertura es la de descubrimiento, lo cual implica que la póliza únicamente ofrece cobertura cuando el tomador, asegurado o beneficiario conoce el hecho dañoso dentro de la vigencia de la póliza, esto es, del 8 de diciembre de 2011 y el 19 de junio de 2012. De las condiciones citadas, también llama la atención que la cobertura está condicionada a actos que se tipifiquen como delitos contra la administración pública, por lo que el descubrimiento al que alude la modalidad de cobertura se relaciona con el conocimiento de delitos contra la administración pública por parte de funcionarios de la CÁMARA DE REPRESENTANTES.

Pues bien, a partir de este razonamiento, encontramos que no se cumplió con dicha condición, por cuanto dentro de la vigencia de las pólizas no se conoció de delitos contra la administración pública y es que, ni siquiera a día de hoy, se han iniciado denuncias por delitos de este tipo, en la medida que no se evidencia la configuración de delito contra la administración pública alguno, ni que se haya conocido dentro de la vigencia de la póliza.

Del auto de imputación del que se realiza el presente pronunciamiento tampoco se evidencia la existencia de delitos contra la administración pública, menos aun si se considera que la atribución de responsabilidad de los presuntos responsables se realiza a título de culpa grave y, por el contrario, gran parte de los delitos contra la administración pública contenidos en el título XV del Código Penal requieren su realización a título de dolo, a excepción del peculado culposo, por lo que no se infiere siquiera sumariamente que se haya cometido un delito contra la administración pública, lo cual excluiría evidentemente la cobertura de la póliza.

Tenemos entonces que, para que haya cobertura de las pólizas en procesos de responsabilidad fiscal, es estrictamente necesario que se adelanten denuncias o procesos por delitos contra la administración pública en contra de los funcionarios presuntamente responsables, tal y como quedó consignado en las condiciones generales, sin embargo, en el caso concreto, no existe ningún proceso o denuncia por este tipo de delitos, y dentro del discurrir de la Contraloría tampoco se evidencian elementos que configuren un delito de este carácter, lo que hace evidente la exclusión de cobertura.

En consecuencia, el honorable Despacho no tiene una alternativa diferente que desvincular o proferir fallo fiscal, eximiendo de responsabilidad a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. del presente proceso de responsabilidad fiscal.

D. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA POR CUANTO NO SE REALIZÓ EL RIESGO ASEGURADO.

Como se ha venido exponiendo de forma transversal en el documento, no resulta jurídicamente admisible declarar la responsabilidad fiscal en el caso concreto, comoquiera que no se encuentran acreditados los requisitos enlistados en el 5 de la Ley 610 de 2000, en cabeza de los presuntos responsables. En otras palabras y recapitulando las conclusiones a las que se llegó al inicio del escrito, resulta evidente la improcedencia jurídica y fáctica de declarar la existencia de dicha responsabilidad fiscal, por cuanto de los elementos probatorios que obran en el plenario, no se vislumbra ni acredita un patrón de conducta que demuestre una actuación gravemente culposa o dolosa de los funcionarios imputados.

De tal forma, considerando que el amparo básico de la póliza es la *“LA PÉRDIDA ECÓNOMICA QUE SUFRA LA ENTIDAD ESTATAL A CONSECUENCIA DE ACTOS QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”*, siendo este el riesgo asegurado, debe anunciarse que el mismo no se configuró y, por lo tanto, tampoco la obligación condicional del asegurador, en la medida que no existen pruebas que acrediten fehacientemente la comisión de un delito contra la administración pública y, mucho menos, una conducta dolosa o gravemente culposa de los presuntos responsables que de lugar a declaratoria de responsabilidad fiscal, por el contrario, lo cierto es que estos funcionarios actuaron diligentemente en el cumplimiento de sus obligaciones.

De esta manera, al ser jurídicamente improcedente la declaratoria de responsabilidad fiscal, se debe concluir que tampoco puede exigirse pago alguno a mi procurada en el marco de las Pólizas de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000524 y No. 8001000636, lo que por sustracción de materia significa, la no realización del riesgo asegurado.

En consecuencia, el honorable Despacho no tiene una alternativa diferente que desvincular a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. del presente proceso de responsabilidad fiscal.

E. FALTA DE COBERTURA RESPECTO DE LOS RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES NO. 8001000524 Y NO. 8001000636

Al respecto existe un pronunciamiento de la Sala de Casación Civil que, por lo esquemático, vale la pena traer a colación, se trata de la Sentencia del 26 de noviembre de 1999, expediente 5220:

“Así, pues, la cuestión del caso fortuito liberatorio o de fuerza mayor, al menos por norma general, no admite ser solucionada mediante una simple clasificación mecánica de acontecimientos apreciados en abstracto como si de algunos de ellos pudiera decirse que por sí mismo, debido a su naturaleza específica, siempre tienen tal condición, mientras que otros no. En cada evento es necesario estudiarlas circunstancias que rodean el hecho con el fin de establecer si, frente al deber de conducta que aparece insatisfecho, reúne las características que indica el art. 1º de la Ley 95 de 1890, tarea en veces dificultosa que una arraigada tradición jurisprudencial exige abordar con severidad.

Esos rasgos por los que es preciso indagar, distintivos del caso fortuito o de fuerza mayor, se sintetizan en la imposibilidad absoluta de cumplir derivada de la presencia de un obstáculo insuperable unido a la ausencia de culpa del agente cuya responsabilidad se pretende comprometer (g.j., t. xlii, p. 54) y son, en consecuencia, los siguientes:

a) *Que el hecho sea imprevisible, esto es que en condiciones normales haya sido lo suficientemente probable para que ese agente, atendido su papel específico en la actividad que origina el daño, haya podido precaverse contra él. Aunque por lo demás, respecto del acontecimiento de que se trata, haya habido, como lo hay de ordinario para la generalidad de los sucesos, alguna posibilidad vaga de realización, factor este último con base en el cual ha sostenido la jurisprudencia que “...cuando el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor...” (g.j., tomos liv, p. 377, y clviii, p. 63).*

b) *Que el hecho sea irresistible en el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente sojuzgado por el suceso así sobrevenido-, en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido, habida cuenta que si lo que se produce es tan solo una dificultad más o menos acentuada para*

enfrentarlo, tampoco se configura el fenómeno liberatorio del que viene haciéndose mérito”.

Sobre la eficacia de las exclusiones se tiene que, tal como lo señala el Artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume:

“(…) Art. 1056.- Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado.”.

En virtud de la facultad citada en el referido artículo, el asegurador decidió otorgar determinados amparos, siempre supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, e incorpora en la póliza determinadas barreras cualitativas que eximen al asegurador a la prestación señalada en el contrato, las cuales se conocen generalmente como exclusiones de la cobertura.

Ahora bien, en el improbable y remoto caso de que el Honorable Despacho encuentre que el actuar de los presuntos responsables fue doloso o gravemente culposo, y que se acredite sin lugar a dudas la existencia de un daño patrimonial al Estado y, por lo tanto, decida declarar la responsabilidad fiscal, se debe tener en cuenta que el hecho investigado no se encuentra amparado en la póliza, ya que se enmarcan dentro de las exclusiones pactadas en las condiciones generales y particulares del contrato de seguro, en concreto, la siguiente

“1.3. EXCLUSIONES GENERALES APLICABLES A TODO EL CONTRATO

COLPATRIA QUEDARÁ LIBERADA DE TODA RESPONSABILIDAD BAJO EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO CUANDO SE PRESENTE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES HECHOS O CIRCUNSTANCIAS:

A. DOLO O CULPA GRAVE DEL TOMADOR O ASEGURADO”

Las exclusiones en este caso cumplen con las exigencias en el Estatuto del Consumidor entanto que yacen descritas en carácter legibles, visibles y comprensibles en la proforma anexa que se entregó al tomador con la suscripción del seguro, el pacto de estas exclusiones hace parte del ejercicio legal y libre de la actividad mercantil aseguradora en tanto que el art. 37 de la Ley 1480 del 2011 permite a la aseguradora, en tanto que los seguros son contratos de adhesión, instrumentar la prerrogativa del art. 1056 del Código de Comercio a través de la institución de exclusiones.

La Superintendencia financiera Colombia, bajo Radicado 2019153273-007-000, procedió a dar una posición frente a los amparos y exclusiones de la póliza, emitiendo la siguiente consideración:

“Bajo esta línea de interpretación, debe entenderse que en aquellos casos en que en consideración al número de amparos y sus respectivas exclusiones, así como la necesidad de ofrecer una descripción legible, clara y comprensible de los mismos, no sea susceptible incorporar todos estos conceptos en una sola página, pueden quedar, tanto los primeros como las segundas, consignados en forma continua a partir de la primera página de la póliza, como lo precisa la instrucción de este Supervisor.”

El día 4 de febrero de 2020 la Dirección Legal de Seguros de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de respuesta a petición con radicado 2019153273-007-000, consideró que *“en aquellos casos en que en consideración al número de amparos y sus respectivas exclusiones, así como la necesidad de ofrecer una descripción legible, clara y comprensible de los mismos, no sea susceptible incorporar todos estos conceptos en una sola página, pueden quedar, tanto los primeros como las segundas, consignados en forma continua a partir de la primera página de la póliza [...]”*.

La regla consistente en que las exclusiones deben figurar en la primera página de la póliza so pena de ineficacia de la estipulación se encuentra en el art. 44 de la Ley 45 de 1990 y el art. 184.2 del EOSF que dicen:

Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias:

1. *Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, a la presente Ley [o estatuto, según el caso] y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva [...]*

3o. *Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza.*

Pero dicha norma no define qué es y qué no es Póliza y tampoco establece qué se entiende por primera página de la misma, es decir, si con base en el art. 1047 y 1048 del Código de Comercio, las condiciones generales y particulares son la Póliza y la integran, ¿cuál es la pauta normada de la que la juez concluye que las exclusiones deben estar indefectiblemente en la carátula (que no es lo mismo que primera página) de la Póliza si el art. 184 del EOSIF no hace tal distinción?

Tal es la disonancia semántica del fallo con las normas que ha aplicado irregularmente que ni siquiera, la reglamentación de la Superintendencia Financiera le da la razón a la jueza, dicha entidad expidió la Circular Básica Jurídica 07 de 1996 indicando respecto de las pólizas de seguros lo siguiente:

1.2.1. Requisitos generales de las pólizas de seguros

Para el adecuado cumplimiento de lo señalado en el art. 184 numeral 2 del EOSF las entidades aseguradoras deben redactar las condiciones del contrato de forma que sean claramente legibles y que los tomadores y asegurados puedan comprender e identificar las definiciones de los riesgos amparados y las obligaciones emanadas del negocio celebrado.

Para ello, las pólizas deben incluir, cuando menos, la siguiente información:

1.2.1.1. En la carátula

- a. Las condiciones particulares previstas en el art. 1047 del Código de Comercio.*
- b. En caracteres destacados o resaltados (es decir que se distingan del resto del texto de la impresión) el contenido del inciso primero del art. 1068 Código de Comercio. Para el caso de los seguros de vida, el contenido del art. 1152 del mismo ordenamiento legal.*

1.2.1.2. A partir de la primera página de la póliza (amparos y exclusiones)

Los amparos básicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma continua a partir de la primera página de la póliza. Estas deben figurar en caracteres destacados o resaltados, según los mismos lineamientos atrás señalados y en términos claros y concisos que proporcionen al tomador la información precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada. No se pueden consignar en las páginas interiores o en cláusulas posteriores exclusiones adicionales en forma distinta a la prevista en este numeral.

En virtud de lo indicado, en caso de determinarse la existencia del algún daño generado por una conducta dolosa o gravemente culposa, o que se haya causado por acciones u omisiones al margen de las funciones de su cargo, no tendrán cobertura por estar expresamente excluidas en la póliza de seguro, en la medida que el dolo o la culpa grave se excluyeron de la cobertura de la póliza.

Por lo anterior, respetuosamente solicito la desvinculación y fallo sin responsabilidad de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

F. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO.

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que las pólizas que hoy nos ocupan prestan cobertura para los hechos objeto de este litigio, que se realizó el riesgo asegurado y que, en este sentido, ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., exclusivamente bajo esta hipótesis, el ente de control deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. *El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.*

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia, ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

*“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, **el valor de la prestación a cargo de la aseguradora**, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, **se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado**, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización”¹¹ (Subrayado y negrilla fuera de texto original)*

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante, y en la proporción de dicha pérdida que le

¹¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952.

corresponda debido a la porción de riesgo asumido, que en este caso resulta ser la siguiente, para los amparos que a continuación se relacionan:

- **Póliza de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000524:**

FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL 200,000,000.00
Deducible: 2.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA

- **Póliza de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000636:**

FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL 200,000,000.00
Deducible: 5.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MÍNIMO 1.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis no se ha realizado el riesgo asegurado, y que el contrato de seguro no presta cobertura por las razones previamente anotadas, en todo caso, dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el ente fiscal en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

G. DEL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD EN LO CONCERNIENTE AL DEDUCIBLE DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES NO. 8001000524 Y NO. 8001000636

En el eventual caso que el Despacho encuentre configurada la responsabilidad civil del asegurado, es pertinente recordar que en el contrato de seguro convenido se pactó un deducible, el cual corresponde a una porción del siniestro que debe asumir por cuenta propia el asegurado. De esta manera, en la mentada póliza se contempló un deducible así:

- **Póliza de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000524:**

FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL 200,000,000.00
Deducible: 2.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA

- **Póliza de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000636:**

FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL 200,000,000.00
Deducible: 5.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA MÍNIMO 1.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE

Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que el asegurado tiene que asumir el valor del deducible que, para el caso, corresponde al 2 y 5% del valor de la pérdida.

V. PETICIONES

A. Comedidamente, solicito se **PROFIERA FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL** en contra de DIANA ROJAS BRIÑEZ y BLANCA EMMA SALAZAR BONILLA y, consecuentemente, se

ORDENE EL ARCHIVO del proceso identificado con el expediente No. PRF-88112-2017-002, que cursa actualmente en la CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL 1 de la CONTRALORÍA DELEGADA PARA LA RESPONSABILIDAD FISCAL, INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO, por cuanto de los elementos probatorios que obran en el plenario, no se acreditan de ninguna manera los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal, esto es, no se demuestra un patrón de conducta doloso o gravemente culposo en cabeza de los presuntos responsables, ni un daño causado al patrimonio de la administración pública.

- B.** Comedidamente, solicito se **ABSUELVA** de toda responsabilidad como tercero civilmente responsable a **AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.** como tercero garante, ya que existen una diversidad de argumentos fácticos y jurídicos que demuestran, efectivamente, que para las Pólizas de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000524 y No. 8001000636, no se ha configurado el riesgo asegurado conforme con los hechos objeto de investigación.

Subsidiariamente:

- C.** Que en el improbable y remoto evento en el que se declare como tercero civilmente responsable a mi representada, pese a que es indiscutible que no existen fundamentos fácticos ni jurídicos para ello, comedidamente solicito que se tenga en cuenta el límite del valor asegurado y el monto del deducible establecido en las caratulas de las pólizas.

VI. MEDIOS DE PRUEBA

Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:

1. DOCUMENTALES

- 1.1. Copia de la Póliza de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000524, certificado 0.
- 1.2. Copia de la Póliza de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000524, certificado 1.
- 1.3. Copia de la Póliza de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000524, certificado 2.
- 1.4. Copia de la Póliza de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000524, certificado 3.
- 1.5. Copia de la Póliza de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000524, certificado 4.
- 1.6. Copia de la Póliza de Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales No. 8001000636, certificado 0.
- 1.7. Condiciones Generales de la Póliza de Seguro de Manejo Global para Entidades Oficiales.

VII. ANEXOS

1. Certificado de existencia y representación legal de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
2. Poder especial otorgado al suscrito, en concordancia con la Ley 2213 de 2022.

VIII. NOTIFICACIONES

- El suscrito recibe notificaciones en la Carrera 11 A No.94 A – 56, Oficina 402 de la ciudad de Bogotá o en la dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co.

Del Señor Contralor, Atentamente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No 19.395.114 expedida de Bogotá.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.